



La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la transmisión por la Universidad consultante al instructor de un procedimiento disciplinario tramitado por una determinado Ayuntamiento y que en la actualidad se encuentra en fase de información previa, de determinados datos referidos al funcionario contra el que se tramita el citado procedimiento, a fin de que por el órgano instructor se resuelva finalmente la apertura del citado procedimiento.

La transmisión así planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) en caso de que una norma con rango de Ley habilite la cesión.

La mencionada causa habilitadora se encuentra aclarada por el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual será posible el tratamiento o comunicación de los datos sin contar con el consentimiento del afectado cuando “Lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concorra uno de los supuestos siguientes:

- El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

- El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”.

El sujeto contra el que se dirige el procedimiento, según se indica en la consulta, tiene la condición de funcionario de la corporación en cuyo seno se tramita aquél, siéndole así de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo artículo 93.1 dispone que “Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen

disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto”.

Añade el artículo 98.1 que “no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido”, disponiendo el artículo 98.2 que “el procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable”. Concluye este precepto estableciendo que “en el procedimiento quedará establecido la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos”.

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad valenciana, debe estarse al texto refundido de la Ley de la Función Pública, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1985, cuyo artículo 54 dispone que “Se hace extensivo al personal funcionario de la Generalitat Valenciana el régimen disciplinario establecido por la normativa del Estado”.

De este modo, la tramitación del procedimiento disciplinario deberá garantizar los principios fundamentales del procedimiento y las garantías del derecho sancionador, previstas igualmente en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Estos principios, en el ámbito de la Administración general del Estado se garantizar en el régimen establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real decreto 33/1986, de 10 de enero. Si bien sus disposiciones no son aplicables al supuesto analizado sí habrán de tenerse en cuenta las medidas que el citado Reglamento impone como garantías del funcionario durante la tramitación del procedimiento, y que se corresponden con las garantías generales impuestas por la Ley 30/1992 para el procedimiento administrativo.

En particular, el citado Reglamento prevé en su artículo 28 que “El órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar previamente la realización de una información reservada”. En este sentido, el artículo 69.2 de la Ley 30/1992 dispone que “. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento”.

Al propio tiempo, el artículo 34.1 establece que “El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción”, reflejándose así lo dispuesto en el artículo 78.1 de la Ley 30/1992, a cuyo tenor “los actos de instrucción necesarios para la

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos”.

De lo dispuesto en las normas que se han venido reproduciendo cabe desprender que, por una parte, será posible la realización de actuaciones previas de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos, a fin de conocer si efectivamente procederá la apertura del correspondiente procedimiento disciplinario. Al mismo tiempo, en caso de no obtenerse estas informaciones en la fase previa de investigación, el órgano instructor podría requerir durante la tramitación del procedimiento las citadas informaciones, en cuanto resulten relevantes para el mencionado esclarecimiento, siempre con respeto a las garantías esenciales del procedimiento, establecidas tanto por la Ley 7/2007 como por la Ley 30/1992.

De este modo, la negativa a la transmisión de la información durante las actuaciones previas a la iniciación del procedimiento, siendo así que dicha información deberá facilitarse a solicitud del instructor durante la tramitación del procedimiento en caso de acordarse su inicio, llevaría aparejada la consecuencia de que pudiera procederse a la apertura del procedimiento disciplinario sin constar los suficientes indicios a fin de que los mismos fueran transmitidos durante la tramitación de aquél, en perjuicio del propio funcionario, que debería pechar con las cargas derivadas de la apertura del procedimiento.

De este modo, puede considerarse que la comunicación de los datos durante la tramitación de la información previa a la eventual iniciación de un procedimiento disciplinario se encontraría amparada por los artículos 93 y 98 de la Ley 7/2007, lográndose así la garantía de los derechos del funcionario.

Al propio tiempo, debe recordarse que el instructor deberá respetar los principios de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con los datos así facilitados. Así, en particular, debe recordarse que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Ello supone que la información que hubiera sido obtenida por el instructor en la tramitación de la información previa a la eventual iniciación del expediente disciplinario únicamente podría ser empleada para los fines que justificaron dicha cesión; es decir, la determinación de la procedencia de la apertura del procedimiento disciplinario y la tramitación del mismo en caso de



que así se acordase, no pudiendo ser empleada para ninguna otra finalidad distinta de la mencionada.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 53.12 de la Ley 7/2007 dispone que los empleados públicos “guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público”.